



MONSANTO

Un negocio mortal

LAURA BÉCQUER PASEIRO

Más allá del debate mundial en torno al uso de alimentos modificados genéticamente, el eje de los reclamos contra la trasnacional Monsanto está centrado en la actualidad en sus prácticas monopólicas e ilegales, que han ocasionado graves daños al medio ambiente y la salud de las personas.

Monsanto es una de las empresas biotecnológicas líderes en proveer productos para la agricultura. Fundada en 1901 y con sede en Estados Unidos, controla gran parte del mercado mundial de semillas y cuenta con productos muy conocidos como el herbicida Roundup y el maíz genéticamente modificado MON 810.

A lo largo de los años Monsanto ha acumulado un historial de irregularidades que lo han convertido en una pesadilla. De acuerdo con la filial de Greenpeace en México, la empresa produjo y comercializó el agente naranja, usado durante la guerra en Vietnam; el DDT y los PCB o askareles, químicos causantes de graves daños a la salud humana y al ambiente. Sobre esta empresa pesan, además, condenas por sobornar a autoridades para intentar introducir sus productos en diferentes mercados.

El investigador Jeffrey Smith explicó a Russia Today que los productos genéticamente modificados de Monsanto poseen altos niveles del herbicida Roundup que contiene glifosato, así como la toxina Bt usada contra los insectos, lo que provoca alteraciones en la salud.

“La toxina Bt la produce la bacteria cuyos genes introduce Monsanto a sus semillas. La toxina mata a los insectos provocándoles daños en su sistema digestivo. La empresa aseguraba que esto no iba a tener efectos en las personas; pero un estudio del 2012 demuestra que la toxina es igualmente efectiva para destruir las células del organismo humano”, agregó Smith.

CASO LATINOAMERICANO

Las garras de Monsanto han alcanzado a América Latina y el Caribe. Países como México, Brasil y Argentina, han sufrido los embates de la trasnacional. Por ejemplo, en

la provincia argentina de Santa Fe, corazón de la producción de soja de la nación sudamericana, se prohibió rociar sustancias agroquímicas a menos de 500 metros de las zonas pobladas. Sin embargo, los cultivos de soja de Monsanto se siembran y fumigan a 30 metros de las viviendas. Como resultado, los habitantes están expuestos a sustancias tóxicas que han incidido en el aumento de enfermedades como el cáncer.

En México fue conocido el caso del tribunal que suspendió la emisión de permisos a transnacionales como Monsanto, para la siembra de maíz transgénico. Varias organizaciones sociales consideraron que con esa medida no solo se evitan los daños ambientales o al ser humano, sino también se rompe con el monopolio de las trasnacionales de la biotecnología en la agricultura.

Las semillas que vende esta compañía son infértiles cuando se intentan cosechar por segunda vez, lo cual obliga a tener que comprar de nuevo el producto. De esa manera se aseguran que los productores sean dependientes de sus servicios.

Además, se han dado casos en los que Monsanto impone contratos restrictivos a los campesinos antes de venderles las semillas modificadas genéticamente. Estos acuerdos incluyen la compra de herbicidas facturados por la propia empresa, no ofrecen garantía del aumento de la cosecha y le da a la trasnacional el derecho a confiscar una parte de la cosecha.

Ello crea un círculo vicioso que ata de manos a los campesinos y le permite a Monsanto monopolizar el mercado. Así sucedió en el estado brasileño de Mato Grosso, donde la Unión Rural Sinop, sindicato que representa los intereses de los agricultores, demandó a la empresa, que se aprovecha de su posición favorable en el mercado como único proveedor de Intacta RR2 PRO (soja transgénica) para obligar a los agricultores a cumplir sus cláusulas.

Aunque muchas son las voces que se han alzado contra el proceder de Monsanto, la compañía le sigue apostando a cualquier tipo de mecanismo para mantener su negocio, haciendo caso omiso a los daños irreversibles que va dejando a su paso.

Evo Morales lamenta muerte de uniformados a manos de cocaleros

TARIJA, Bolivia.—El presidente boliviano, Evo Morales, lamentó el martes la muerte de cuatro miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) a manos de cocaleros en el municipio de Apolo, cuando intentaban erradicar plantaciones excedentarias de coca.

En conferencia de prensa desde la ciudad de Tarija, lamentó los hechos y aseguró que el Gobierno no abandonará a las familias de las víctimas, al tiempo que consideró inaceptable la posición de los autores de la emboscada.

Por otra parte, explicó que la acción fue organizada por un grupo armado que se resiste a la erradicación de coca ilegal en Apolo, departamento de La Paz, en una acción que consideró un acto criminal y bien planificado desde el punto de vista militar.

Por el momento, una comisión del Ministerio Público, integrada por dos fiscales, investiga los hechos en Apolo; en tanto en La Paz comenzó el interrogatorio a 13 cocaleros presos.

Luego de los hechos, en los cuales se presume la participación de narco traficantes internacionales, el Ejecutivo boliviano estudia la posibilidad de cerrar la frontera con Perú, desde donde, supuestamente, llegaron los que instigaron la emboscada contra la fuerza encargada de erradicar plantaciones de drogas.

En Bolivia es legal el cultivo de la coca, pero solo en lugares y cantidades limitadas; en tanto miles de plantaciones excedentarias son destruidas cada año por la Fuerza de Tarea Conjunta, precisa PL.

EE.UU.: El uso de drones es “legal, preciso y efectivo”

WASHINGTON.—El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, declaró este martes sentir preocupación por los civiles muertos como consecuencia de los ataques con drones; pero aseguró que el uso de esos aviones no tripulados es “legal, preciso y efectivo”.

Carney respondió así en su rueda de prensa diaria a una pregunta motivada por informes publicados por Organizaciones no Gubernamentales, que aseguran que los ataques con drones en Paquistán y Yemen han matado más civiles que terroristas.

El portavoz afirmó que su gobierno está “revisando estos informes con cuidado”, según cita el diario Washington Examiner.

“Es un hecho que los ataques norteamericanos con drones han provocado víctimas civiles”, admitió Carney; y explicó que eso es un riesgo “inherente que existe en todas las guerras”. “Estados Unidos no toma riesgos cuando nosotros o nuestros socios tenemos la capacidad para capturar terroristas de forma individual. Nuestra preferencia es siempre detener, interrogar y juzgar”, puntualizó.

La publicación de los informes sobre los efectos de los drones ha coincidido con la visita a Washington del primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, quien en un discurso pronunciado este martes en el Instituto estadounidense por la Paz pidió el fin del uso de estos aparatos, un día antes de entrevistarse con el presidente Obama.

Recordó que una conferencia interpartidista en Pakistán había concluido que “el uso de drones era, no solo una violación de la soberanía” del país, “sino que iba en detrimento” de los esfuerzos paquistaníes en la lucha contra el terrorismo, refiere AFP.

DPA apunta que aunque no hay datos oficiales sobre los ataques con aviones no tripulados, la red de periodistas independientes Bureau of Investigative Journalism de Londres reúne información desde el 2010 sobre las operaciones.

Los datos se refieren a misiones contra presuntos terroristas en Pakistán, Yemen y Somalia, y no hay información sobre otros países.

En Pakistán, la red registró 376 ataques de drones desde el 2004, en los cuales han muerto entre 2 mil 525 y 3 mil 613 personas. De ellas, hasta 926 eran civiles, y de estos, hasta 200 niños.

En Yemen, la organización contabiliza entre 54 y 64 ataques desde el 2002, que habrían dejado hasta 397 muertos. De ellos, hasta 58 eran civiles, en cinco casos niños. Se cree que pudieron ocurrir otros 100 ataques más que no han podido ser confirmados, con hasta 467 muertos.

En Somalia ha habido, según las investigaciones, entre tres y nueve bombardeos con drones desde el 2007. Los muertos son entre siete y 27, de ellos hasta 15 civiles.



Los drones son un elemento clave en las nuevas guerras de Washington. FOTO: AFP